



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

RESOLUCIÓN

Expediente: 067/2021

Archivo de las actuaciones

Fecha entrada: 17/12/2021

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 10 de noviembre de 2021 tiene entrada en el Registro general de la Agencia Española de Protección de Datos una denuncia de AAA referida a un procedimiento judicial seguido en el Juzgado de lo Penal núm. 2 de BBB, siendo los términos de dicha denuncia los siguientes:

"1. Que vengo a formular denuncia frente al Magistrado titular del juzgado de lo penal número dos de BBB. Ilmo. Sr. D. CCC, pues a mi entender y con carácter de presunción ha dispuesto de mis datos relativos a mi histórico penal (tres sentencias condenatorias, siendo la última del año 2010, extendiendo los hechos o motivos de las mismas, tanto en la Sentencia nº 34/2021 de fecha 28 de febrero de este mismo año, como así en el auto donde se acuerda no concederme el beneficio de la suspensión de la condena, aún reuniendo todos y cada uno de los requisitos que el legislador penal entiende como necesarios para tal fin, sobre la base de su facultad de decidir, decisión esta que motiva en aquellos antecedentes penales que el propio art. 80.1 CP, donde le otorga tal potestad, al tiempo, y de manera imperativa se dice "NO DEBERAN SER TENDIDOS EN CUENTA".

Todo ello es base a los siguientes HECHOS y FUNDAMENTOS DE DERECHO.

HECHOS:

PRIMERO. En la precitada Sentencia número 34/2021, que doy por reproducida por obvias razones de economía procesal y por la situación en la que me hallo, en la que se antoja imposible poder aportar tal documento.

Comienza el relato en la primera página apuntando, bien sea por omisión, bien sea por negligencia, pero en cualquier caso de forma torcedera manifestando. "Cuyos antecedentes penales obran unidos a Autos", obrando a mi modesto entender que los mismos estaban cancelados, no imputables a la causa, y así es ya que,



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

efectivamente, en dicha sentencia se dice "NO CONCURRIR CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA ACCIÓN CRIMINAL.

SEGUNDO. Efectivamente, la norma que ahora aquí invoco, para que se determine, si por parte de este Magistrado ha existido una extralimitación posible, le dota de facultada para la consulta e incluso obligación de aquéllos antecedentes que pudieran servir para cualificar, o para aprobar la conducta objeto del litigio, pero jamás para detallar los mismos "erga homnes", y aquí encuentro el quid de la presente denuncia, ya que este Magistrado, se permite por un lado RESTAR CREDIBILIDAD A QUIEN AQUÍ FIRMA POR AQUÉLLOS, pero es que además, y ASÍ INFORMANDO, VULNERANDO CLARA Y PATENTEMENTE MI INTIMIDAD, pues la sentencia en cuestión amén de ser pública (CENDOJ), es visible para la parte contraria, es decir, de poco o nada sirve cancelar un antecedente de robo cumplida mi deuda con el Estado, insisto, y aquí estoy de acuerdo, es que se consulten los mismos, pero jamás detallándolos para alcanzar esa condena penal, ante todos, y más aún, para servirse de los mismos para denegar la suspensión de la condena de 8 meses de prisión que me encuentro cumpliendo, pues como he dicho, la consulta, estaría dentro de los márgenes de la normalidad, pero hacer uso de los mismos y ara más inri detallados, entiendo que se extrapola muy mucho de cuanto dispone la Ley Orgánica sobre protección de datos de carácter personal, efectivamente LEY ORGÁNICA, pues (ilegible) ésta es relativa y así protege un derecho fundamental, como es el incluido en el art. 15 CE relativo a la intimidad personal, que nuestra CARTA MAGNA LO RECONOCE como tal.

TERCERO. De verse, el último párrafo del F.J.3º, este Magistrado, que a la sazón, siquiera dice de manera exacta esas condenas, ya que se reducen a tres, detalla de la siguiente manera HECHOS QUE NO GOZAN EN NINGÚN CASO DE PROTECCIÓN, por cuanto y cito literal "teniendo en cuenta que ya fue condenado anteriormente por tres delito en el ámbito de la violencia sobre la mujer (dos de ellos por lesiones, y uno de ellos por amenazas), que además de un delito de quebrantamiento de medida cautelar (es muestra de su desprecio hacia un mandato judicial).

Es decir, tenemos unos antecedentes penales cancelados por un hurto, que siendo cierto que se pueden consultar por los juzgados y tribunales en su labor de juzgar, no lo es menos, que éstos deberían constar en la sentencia como CANCELADOS, y mucho menos y más grave aún detallando los mismo "ante Todos", parte contraria, Audiencia Provincial, e incluso junta de tratamiento en prisión, que como puedes suponer ningún beneficio puedo obtener cuando sobre unos hechos cumplidos y cancelados, en el auto denegando mi petición de suspensión, aun habiendo tramitado el indulto, los vuelve a detallar, ahora ya que este la junta de tratamiento en prisión tachándome textual de "PELIGROSO CRIMINAL", ojo que un



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

delito con una responsabilidad civil de 40 euros ((ilegible) sentencia), por una parte, precisamente (ilegible) por la víctima a requerimiento de la policía para así poder justificar mi detención.

Es de entender que por mucha violencia de género que se trate, donde parece ser que nadie, salvo en petit comité, alguien manifieste la (ilegible) de la norma, no se puede permitir que TODOS LOS DATOS PERSONALES DE LOS TESTIGOS y los aquí citados del acusado que es quien firma, puedan ser vistos por todos, si bien los de la víctima si que gozan de protección, y es por ello, por lo que entiendo que este Magistrado se ha excedido en el tratamiento y uso de aquellos datos, que efectivamente puede consultar e incorporar a autos, para fines amparados por el derecho, pero para justificar una condena, incluso detallando los mismos, sin más (ilegible) que (ilegible) mi intimidad, pues estos datos a fecha de hoy, amén de la víctima e incluso sus allegados, pueden circular con total impunidad de no ponerse COTO A ELLO, y cuando la propia norma penal dice "NO DEBERAN SER TENIDOS EN CUENTA. Esta situación se descubrió en mi recurso de alzada ante la Ilma. Audiencia Provincial, pero como quiera que en asuntos de género todo sirve y nadie se va a preocupar de quitar la razón a otro, la sentencia dice "En cualquier caso y aun centrándose en la sentencia recurrida ... quedará incólume", es decir citar aquéllos antecedentes que para nada deberían ser tenidos en cuenta, detallados, y así continuar con el abuso del derecho, hasta tener conocimiento la prisión en la que me hallo (junta de tratamiento) para la Magistrada Ponente "NO GENERA DAÑO ALGUNO", a mi juicio, esta situación aquí narrada y demostrada por la propia sentencia que doy por reproducida, así como el auto denegando la suspensión de la pena, no genera más daño más allá de haber mancillado mi honor, mi intimidad frente a todos por hechos QUE NO DEBERÍA HABERSE TENEIDO EN CUENTA Y MENOS DETALLARSE.

CUARTO. Con independencia de que por ser autoridad se pueda comprobar la veracidad de lo aquí plasmado, adjunto los documentos que si dispongo y donde se acredita sin género alguno de duda que los hechos que el Magistrado DETALLA, de manera torcedera y con ciertas inexactitudes punibles PARA CONOCIMIENTO DE TODOS, éstos están de sobra CANCELADOS y en consecuencia NI DEBERÍAN DETALLARSE LOS MISMO, para justificar una sentencia penal, pues en primer lugar, esta inclusión de los mismos ya no solo afecta a mi intimidad personal (art. 18 CE), sino que chocan frontalmente contra el principio de legalidad y por extensión al sentido de la pena (art. 25 CE), amén de la prohibición que de manera categórica dispone el código penal (art. 80.1), donde se dice "NO DEBERÁN SER TENIDOS EN CUENTA", resulta más que obvio, que para nada ha servido el haber sido cancelados aquéllos antecedentes de hace casi 12 años, que en cualquier caso deberían haber sido tenidos en cuenta, y mucho menos, (ilegible) PARA DAR UNA IMAGEN DE



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

PELIGROSO CRIMINAL, por alguien que hasta es sabido que está sometido al imperio de la ley (art. 117.1 CE), es decir, la norma suprema para este Magistrado NO EXISTE, o, como así lo entiendo LA INCUMPLE SOBREMNERA.

Todo ello, para causar el mayor daño posible a quien aquí firma, sobre la base de aquellos hechos que jamás deberían haber sido tenidos en cuenta, y MENOS DETALLARLOS A MODO DE AGRAVANTE, y esta es la única realidad, a mi juicio punible, por ello me honro a dirigirme ante su autoridad, para que, se actúe en consecuencia, en caso de tenerse como (ilegible), NADIE A ESTAS ALTURAS PUEDE CONTROLAR EL ACANCE Y CONOCIMIENTO "erga homnes", de aquellos hechos, que formado parte de mi intimidad han destrozado mi honor.

Adjunto como DOC. 1 y 2 respectivamente, la contestación a mi solicitud de cancelación que una correcta comprobación de lo aquí plasmado y siempre dentro de lo poco que dispongo en mi situación actual.

En un Estado de derecho, donde nuestra norma suprema establece como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico LA JUSTICIA, nadie puede, ni debe, obviar ésta por mucho que se quiera CASTIGAR SEVERAMENTE, o incluso ESTIGMATIZAR DE POR VIDA, calificándolo de peligroso criminal, por hechos del pasado, CANCELADOS, y bajo la prohibición legal de ser utilizados, pues en este caso estaríamos hablando de una CONDENA A PERPETUIDAD.

Es altamente contradictorio, que aquél archivo al que todo ciudadano tiene acceso dentro de los derechos ARCO, se cancelen, para después, y por capricho, SE SIGAN UTILIZANDO SIN SUSTRATO LEGAL.

QUINTO. Para la correcta comprobación de lo aquí plasmado, entiendo como oportunas, además de las que por su parte se tengan por convenientes, se practiquen los siguientes medios de prueba.

- 1. Se oficie al Juzgado de lo penal número 2 de BBB, a fin de que testimonie para ser unidos al presente los siguientes documentos:*
 - TESTIMONIO DE LA SENTENCIA Nº 34/2021, dictada por ese juzgado.*
 - AUTO DENEGANDO MI SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA CONDENA O SUSTITUCIÓN DE LA MULTA.*
 - CONTESTACIÓN A MI RECURSO SOBRE EL AUTO ANTERIOR, donde se puede comprobar sin género alguno de dudas QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA, Y ASÍ SE HAN DETALLADO HECHOS que en ningún caso deberían (ilegible), todo lo más de haberse cumplido la norma indicar, SIN DETALLAR, que estos estaban CANCELADOS, Y NO SERVIBLES PARA LA CAUSA, si bien esto SI QUE SE OMITE."*



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

Segundo.- Por acuerdo de la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, fechado el 9 de diciembre de 2021, se traslada al denunciante que "[d]el análisis de la documentación aportada no se desprende que, en el presente caso, el conocimiento de la cuestión planteada corresponda a la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de la valoración que pueda realizar la mencionada Autoridad de control". Tras citar el artículo 236 nonies, apartado 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se señala que "de acuerdo con lo previsto en el Convenio suscrito, en fecha 6 de julio de 2017, sobre colaboración en el ejercicio de las funciones propias de las Autoridades de control en materia de protección de datos, se procede a remitir su escrito al Consejo General del Poder Judicial, al que podrá dirigirse para todas las cuestiones relacionadas con el mismo". El expediente remitido por la Agencia Española de Protección de Datos tiene entrada en el Registro general de este órgano constitucional el día 17 de diciembre de 2021.

Tercero.- Mediante comunicación de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Poder Judicial de 21 de diciembre de 2021 se puso en conocimiento del reclamante la entrada en este Órgano Constitucional de su reclamación previamente dirigida a la Agencia Española de Protección de Datos, solicitándose al Juzgado de lo Penal núm. 2 de BBB en esa misma fecha información sobre los hechos a que se refiere la reclamación. En fecha 17 de enero de 2022 ha tenido entrada en el Registro general del Consejo el informe interesado, suscrito por el Magistrado titular de dicho órgano judicial, en el que se señala lo siguiente:

"PRIMERO.- En fecha 28 de enero de 2021 este Juzgado dictó sentencia condenando a AAA como autor responsable de un delito de lesiones (violencia sobre la mujer) a las penas de 8 meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena, además de 3 años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y sendas prohibiciones de aproximación y comunicación respecto de la víctima por plazo ambas de 2 años.

SEGUNDO.- En fecha 20 de abril de 2021 la Sección Primera de la Audiencia Provincial de BBB dictó sentencia desestimando íntegramente el recurso de apelación presentado por el entonces acusado contra aquella sentencia, y, en consecuencia, confirmó dicha sentencia, que consiguientemente devino firme.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

TERCERO.- Mediante Auto de fecha 2 de septiennre de 2021 se denegó la suspensión de la ejecución de aquella pena de 8 meses de prisión. Resolución que fue objeto de recurso de reforma y subsidiario de apelación, dictándose en fecha 16 de septiembre de 2021 Auto desestimando el recurso de reforma, y en fecha 30 de septiembre de 2021 Auto declarando no haber lugar a trámite el recurso de apelación, por formular el recurrene las alegaciones fuera de plazo. Resolución esta última que no fue objeto de recurso de queja.

CUARTO.- El penado ha presentado numerosos escritos mostrando su disconformidad con la sentencia condenatoria, exponiendo su modo de ver los hechos ya enjuiciados y objeto de sentencia firme, y asimismo ha solicitado el indulto, el cual aún no ha sido resuelto.

QUINTO.- En la queja que nos ocupa el penado indica que no debió este juzgador hacer uso en el cuerpo de la sentencia de los datos de su hoja histórico-penal, y tampoco en el posterior Auto denegándole la pena de suspensiónn que le fue impuesta.

Lo primero que debe indicarse es que la queja del penado versa sobre una cuestión estrictamente jurídico-penal, cual es la repercusión de sus condenas firmes anteriores en la pena finalmente a imponer en sentencia, y asimismo en la concesión o denegación de la suspensión de la pena de prisión. Efectivamente, así debe entenderse, desde el momento en que el art.66.1. regla 6a CP señala lo siguiente, en cuanto a la individualización de las penas a imponer en sentencia: "6.' Cuando no concurren atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho". No cabe duda que entre esas "circunstancias personales" del delincuente se encuentra su hoja histórico-penal, que trajo a colación este juzgador en sentencia de forma conforme a Derecho; tanto es así que dicha sentencia fue recurrida en apelación por el ahora penado, y en segunda instancia se confirmó íntegramente esa sentencia, la de primera instancia, aquella sobre la que versa la queja del penado, en una clara muestra de la Audiencia Provincial de entender conforme a Derecho la sentencia.

Debe necesariamente atenderse a la letra del Real Decreto por el que se regula el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero). En su Exposición de Motivos se señala que "La consecución de este objetivo pasa por proporcionar a los jueces, fiscales, secretarios judiciales y policía judicial nuevas herramientas de trabajo que faciliten el manejo de la información y permita que determinados usuarios -previamente definidos, en función del tipo de información que van a manejar- tengan un conocimiento completo de la información que precisan para el ejercicio de las



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

funciones que tienen encomendadas y para la correcta toma de decisiones." Y asimismo se indica que " (...) en el orden jurisdiccional penal, constituirá un instrumento de gran utilidad que permitirá al órgano judicial disponer de otros elementos de juicio, además de los ya existentes, a fin de ponderar sus resoluciones en las distintas fases del proceso penal." También se señala que "La peligrosidad del sujeto es un dato fundamental a la hora de individualizar la pena en la sentencia, ya que el Juez debe tener en cuenta al imponer aquélla no sólo la gravedad del hecho, sino también las circunstancias personales del culpable, conforme a lo dispuesto en el artículo 66.1.6.º de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y para la concesión del beneficio de suspensión de la condena no sólo es necesario que se cumplan los requisitos que se determinan en el artículo 81 del Código Penal, sino que es preciso que el Tribunal también tenga en cuenta la peligrosidad del sujeto, así como la existencia de otros procedimientos penales contra éste, de conformidad con el artículo 80.1 del mismo texto legal".

El art.5 de dicho Real Decreto dispone que "Acceso general a la información contenida en el Sistema de Registros. El Ministerio de Justicia autorizará, estableciendo las medidas de seguridad oportunas, el acceso directo a la información contenida en los Registros Centrales integrados en el Sistema, a: Los órganos judiciales, a través del personal de cada oficina judicial autorizado por el Secretario Judicial, a los efectos de su utilización en los procedimientos y actuaciones de los que están conociendo en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones legales vigentes."

De lo anteriormente expuesto no puede sino afirmarse que el uso de la hoja histórico-penal de un acusado o penado, uso por parte de un Juez competente, está legalmente previsto y autorizado por la norma que creó precisamente ese Registro en el que se integran los antecedentes penales de todos los mayores de edad condenados en España a penas firmes, el antes extractado, lo que constituye el título legal del por qué un Juez está legitimado para consultar la hoja histórico-penal de un acusado o penado sometido a la decisión judicial, pues la consulta de esos datos es necesaria para argumentar la decisión judicial y que esta sea lo más ajustada a las circunstancias personales del inmerso en el proceso penal, ya sea en fase de enjuiciamiento o de ejecución.

De otro lado, el art.19.3 del referido Real Decreto que regula el funcionamiento de los Registros al servicio del Ministerio de Justicia, entre los que se encuentra el Registro que recoge los antecedentes penales, establece lo siguiente: "3. La información relativa a las inscripciones canceladas se conservará en una sección especial y separada a disposición únicamente de los Juzgados y Tribunales españoles." Dicha norma acaba por revelar que incluso los antecedentes penales cancelados se hallan visibles a disposición de los Juzgados y Tribunales españoles,



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

evidentemente para su uso en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que en virtud del art.117.1 CE tienen encomendada ("La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley").

En el presente caso este juzgador hizo uso de los antecedentes penales del acusado entonces, para argumentar su decisión en sentencia al respecto de la pena que, en atención al delito, y a que no concurrían en su persona ni agravantes ni atenuantes y a sus circunstancias personales, le correspondía, lo que exigía hacer mención a los datos tomados en cuenta en sentencia, y fue por ello por lo que necesariamente hubo de atenderse a los antecedentes penales del acusado.

Y por lo que se refiere al empleo de los antecedentes penales del entonces ya penado para decidir si procedía o no suspenderse la pena de 8 meses de prisión impuesta en sentencia, el art.80.1 CP dispone que "Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas." Quiere esto decir que para tomar esa decisión sobre suspensión o no suspensión, que no constituye un derecho automático del penado sino una facultad del juzgador cuando existan expectativas de no comisión de delitos futuros, necesariamente han de tenerse en cuenta una serie de datos del penado, los antes expuestos, entre los que se hayan nuevamente sus circunstancias personales, además de sus antecedentes, y, especialmente, debe analizarse si es o no " (...) razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos". Es por ello y todo lo antes expuesto, que resultaba necesario consultar la hoja histórico-penal del penado y analizar esos datos, para decidir en consecuencia sobre la suspensión o no de la pena de prisión, como se hizo en el Auto de denegación, que, al igual que la sentencia, devino finalmente firme.

El art.8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales dispone que "2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE)



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley."

Por su parte, el referido art.6.1 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), Reglamento en su letra establece que: "**1.** El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones: **e)** el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento".

De este modo, correspondiendo a este Magistrado, como integrante del Poder Judicial, el ejercicio de la potestad jurisdiccional, tanto en su cometido de juzgar (sentencia) como de ejecutar lo juzgado (concesión o denegación de la suspensión de la pena de prisión firme), según el art.117.1 CE, respecto de los hechos cometidos por quien ahora presenta la queja, y encomendando una norma con rango de Ley Orgánica, como es el Código Penal, el análisis de las circunstancias personales del sujeto, entre otros datos, así como sus antecedentes (lo que no debe confundirse con la reincidencia), es por lo que el uso de la hoja histórico-penal del sujeto para la toma de ambas decisiones judiciales estaba habilitado por la norma no sólo sustantiva, sino igualmente por la norma organizativa reguladora del Registro de antecedentes penales, como antes se ha expuesto, y por las normas de Derecho Comunitario y española reguladoras de la protección de datos de carácter personal, las antes expuestas, que permiten el uso de datos necesarios para la toma de decisiones encomendadas a los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Por ello, entiende este juzgador que el empleo de esos datos no vulneró la protección de datos personales del ahora penado firmante de la queja a resolver."

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Con arreglo a lo prevenido en el artículo 2.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, "[e]l tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de que sean competentes, así como el realizado dentro de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables". En este sentido, el artículo



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

236 nonies, apartado primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su redacción vigente hasta el día 15 de junio de 2021, establecía que “[l]as competencias que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (en la actualidad la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre), atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial”.

Por su parte, el apartado 1 del artículo 236 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, vigente desde el día 16 de junio de 2021, fecha en la que esta última entró en vigor, establece que “[e]l tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo y en las leyes procesales”. Igualmente da nueva redacción la referida Ley Orgánica 7/2021 al artículo 236 octies de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo apartado primero establece las funciones que corresponden al Consejo General del Poder Judicial respecto a las operaciones de tratamiento efectuadas con fines jurisdiccionales por los Juzgados y Tribunales y las Oficinas judiciales, entre las que se encuentran la supervisión del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales mediante el ejercicio de la labor inspectora (letra a) y la tramitación de las reclamaciones interpuestas por los interesados, informándose al reclamante sobre el curso y resultado de la reclamación en un plazo razonable, previa realización de la investigación oportuna si se considera necesario (letra e).

Segundo.- La competencia del Consejo General del Poder Judicial en materia de protección de datos personales se ejerce, por tanto, respecto del tratamiento de los datos efectuados con fines jurisdiccionales, que vienen caracterizados, con arreglo a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 236 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su redacción anterior a la Ley Orgánica 7/2021, por la incorporación de los datos a los procesos de que



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

conozcan los tribunales y por estar relacionada su finalidad directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Tras la entrada en vigor de la citada ley orgánica, el precepto correlativo de la Ley Orgánica del Poder Judicial es el apartado primero del artículo 236 bis, a cuyo tenor *"[t]endrá fines jurisdiccionales el tratamiento de los datos que se encuentren incorporados a los procesos que tengan por finalidad el ejercicio de la actividad jurisdiccional"*.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 236 nonies LOPJ, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2021, las competencias que de acuerdo con lo establecido en el artículo 236 octies, corresponden a la autoridad de protección de datos personales con fines jurisdiccionales serán ejercidas, respecto del tratamiento de los mismos realizados por Juzgados y Tribunales, por la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial.

Tercero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 3/2018, *"[l]a Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en aras del adecuado ejercicio de las respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, les atribuye en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia"*. El principio de colaboración entre las referidas instituciones se plasma asimismo en el apartado 3 del artículo 236 octies de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2021. El apartado 4 de este mismo precepto, con similar redacción a la del artículo 236 nonies, apartado 3, en la redacción anterior a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2021, establece que *"[c]uando con ocasión de la realización de actuaciones de investigación relacionadas con la posible comisión de una infracción de la normativa de protección de datos las autoridades competentes a las que se refieren los apartados anteriores apreciaran la existencia de indicios que supongan la competencia de otra autoridad, darán inmediatamente traslado a esta última a fin de que prosiga con la tramitación del procedimiento"*.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

Por lo demás, en fecha 6 de julio de 2017 el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Española de Protección de Datos suscribieron un convenio de colaboración en el ejercicio de las funciones propias de las Autoridades de control en materia de protección de datos.

En el presente caso, los hechos denunciados se refieren a la posible utilización indebida de la hoja histórico penal del reclamante por un Magistrado en el curso de procedimientos penales, por lo que se dan los elementos caracterizadores de los tratamientos de datos con fines jurisdiccionales, siendo competente para su conocimiento el Consejo General del Poder Judicial y ajustado a los preceptos transcritos sobre colaboración entre autoridades de protección de datos el traslado efectuado por la Agencia Española de Protección de Datos.

Cuarto.- Con arreglo a lo prevenido en el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Agencia Española de Protección de Datos *"inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos de carácter personal, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción"*.

En el marco de las funciones que el Consejo General del Poder Judicial tiene asignadas como autoridad de control en materia de protección de datos personales, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales, le corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad a trámite de la reclamación formulada. En este sentido, no concurriendo ninguna de las causas de inadmisión establecidas en el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 3/2018, y en el marco de las actuaciones previas de investigación a que se refiere el artículo 67 de la misma, se ha recabado información al Juzgado de lo Penal núm. 2 de BBB, contra el que va dirigida la denuncia sobre la posible vulneración de la normativa de protección de datos personales.

Quinto.- En el ejercicio de sus competencias como autoridad de protección de datos, el Consejo General del Poder Judicial, al conocer de las



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

reclamaciones formuladas en esta materia, ha adoptado reiteradas resoluciones en las que se ha hecho eco de la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a los límites de los derechos fundamentales y a la necesaria compatibilidad del derecho fundamental a la protección de datos personales consagrado en el artículo 18.4 del texto constitucional con los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, por exigirlo así el principio de unidad de la Constitución. Entre estos otros derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos se encuentra significadamente el derecho a la tutela judicial efectiva sin que se pueda producir indefensión (ex artículo 24 CE).

En este sentido, en el fundamento jurídico 11 de la STC 292/2000, reiterado después en el fundamento jurídico 4 de la STC 17/2013, de 31 de enero, se indica que: *"[E]l derecho a la protección de datos no es ilimitado, y aunque la Constitución no le imponga expresamente límites específicos, ni remita a los poderes públicos para su determinación como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que han de encontrarlos en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, pues así lo exige el principio de unidad de la Constitución"*.

En esta misma línea, el propio Reglamento general de protección de datos reconoce en su considerando (4) que *"... [e]l derecho a la protección de datos personales no es un derecho absoluto sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales con arreglo al principio de proporcionalidad. El presente Reglamento respeta todos los derechos fundamentales y observa las libertades y los principios reconocidos en la Carta conforme se consagran en los Tratados, en particular el respeto a la vida privada y familiar, del domicilio y de las comunicaciones, la protección de los datos de carácter personal, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de empresa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo y la diversidad cultural, religiosa y lingüística"*.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

La plasmación del principio de proporcionalidad al que se refiere el considerando (4) RGPD antes transcrito se realiza mediante la ponderación de los distintos derechos fundamentales y restantes bienes jurídicos constitucionalmente protegidos en juego. Poca duda puede caber de que, en un procedimiento judicial, la realización de tal juicio de ponderación, en orden a determinar la prevalencia de cualquiera de ellos, corresponde al titular del órgano judicial en ejercicio de la potestad jurisdiccional que le ha sido constitucionalmente atribuida en régimen de plena independencia (artículo 117 CE). Para llegar a dicha conclusión basta con recordar lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: *"Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos"*.

No puede existir vulneración de la normativa de protección de datos cuando, como en este caso, los términos concretos en que pueda verse afectado el derecho a la protección de datos personales resultan de la ponderación de los derechos y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos concurrentes, realizada en el seno de un procedimiento judicial, en la que, al cabo, se otorga prevalencia al otro derecho fundamental presente. En este caso, es el derecho de tutela judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión (artículo 24.1 CE) de las diferentes partes del procedimiento judicial y el ejercicio del *ius puniendi* del Estado por los Juzgados y Tribunales los que, concurriendo con el derecho fundamental de protección de datos personales (artículo 18.4 C.E.), actuarían precisamente como límites de este último.

Por lo demás, de los propios términos de la reclamación presentada resulta patente que su objeto es manifestar la discrepancia con el contenido de determinadas resoluciones judiciales adoptadas en el seno de un procedimiento penal, en las que se hizo uso de los datos del reclamante de su hoja histórico penal. En el informe emitido por el titular del órgano judicial se subraya que la cuestión suscitada es estrictamente jurídico-penal, realizándose toda una serie de consideraciones de las que se desprende inequívocamente que el tratamiento discutido por el reclamante se inserta en



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

el ejercicio de la función jurisdiccional, el cual, como se ha señalado anteriormente, corresponde a los Jueces y Tribunales en las condiciones de plena independencia constitucionalmente establecidas. Ningún pronunciamiento puede realizar en dicho ámbito el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del Poder Judicial, ni siquiera interviniendo como autoridad de protección de datos, vedándose expresamente el artículo 12.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sexto.- Habiendo quedado delimitados los hechos denunciados en la reclamación presentada y en el informe del órgano judicial, no procede la realización de ulteriores actuaciones de investigación, debiendo acordarse el archivo del expediente por no apreciarse ninguna vulneración de la normativa de protección de datos personales.

Por lo expuesto,

ACUERDO

1.- Archivar las actuaciones de la reclamación presentada por AAA frente al Juzgado de lo Penal núm. 2 de BBB registrada con el número de expediente 067/2021, por no apreciarse ninguna vulneración de la normativa de protección de datos personales.

2.- Trasladar la presente resolución a la Agencia Española de Protección de Datos, a los fines previstos en el apartado 4 de la cláusula segunda del convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Española de Protección de Datos el 6 de julio de 2017, sobre colaboración en el ejercicio de las funciones propias de las autoridades de control en materia de protección de datos.

3.- Notificar la presente resolución a AAA y al Juzgado de lo Penal núm. 2 de BBB.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Firmado digitalmente
José Luis Gisbert Iñesta
Director de Supervisión y Control de
Protección de Datos (e.f.)